

1966: Sociedad golpista o la crisis de la partidocracia liberal

Por Oscar Anzorena (de Tiempos de violencia y utopía)

Una de las características que marcaron este golpe de estado fue el consenso que tuvo en importantes sectores de la población y en la expectativa desconcertada del resto.

La situación de tensión social—originada por las actitudes de los militares, las presiones de los sindicalistas, los planteos de los empresarios y la campaña golpista de la prensa—era tal, que cuando la población escuchó por radio que los militares por fin habían tomado el poder, se produjo una distensión en la sociedad, un clima de alivio. A nadie se le hubiera ocurrido en ese momento plantear que se iniciaba una dictadura militar en la Argentina. La imagen de Revolución Argentina, como se auto tituló el golpe militar, habla calado muy hondo en los distintos niveles sociales, aun en los más humilde.

Se asociaba el gobierno de Illia a la ineficiencia, la lentitud de procedimientos, la burocracia estatal, el discurso político vacío de contenido. Ya no era únicamente la crítica a un gobierno determinado, sino que estaba implícito y muchas veces explícito el cuestionamiento a los valores de la democracia y al sistema republicano de gobierno. La imagen del hombre político estaba totalmente devaluada y era considerado el viejo oficio de hacer política como algo subalterno, ligado al acomodo y a la corrupción.

Toda la campaña periodística muy hábilmente montada, estaba destinada a hacer crecer a la opinión pública que los males de la sociedad surgían del régimen de organización constitucional y de los partidos políticos. Las revistas que más gravitaron en ese momento, y que prácticamente llevaron de la mano al golpe militar, fueron Primera Plana, Confirmado y Extra. Esta última publicaba en su número de agosto de 1966 un artículo firmado por su director y editor, Bernardo Neustadt, en el que decía "Detrás de Onganía queda la nada. El vacío, el abismo último... Onganía hace rato que probó su eficiencia. La de su autoridad. Si organizó un ejército desteñido de orden ¿por que no puede encauzar el país? Puede y debe. Lo hará".

Por su parte, Mariano Grondona editorializaba en la revista Primera Plana del 30/6/66: "Onganía, en cambio, es pura esperanza, arco inconcluso y abierto a la gloria o a la derrota. Queremos, en cambio, comparar su situación con la de sus antecesores. Y esa situación es idéntica y definida: el advenimiento del caudillo es la apertura de una nueva etapa, la apuesta vital de una nación en dirección de su horizonte.

"El absurdo de un gobierno sin poder quedó, por así decirlo, manifiesto y demostrado. Y con la revolución, todo volvió a su quicio.

"Estas son las cosas profundas que están más allá de las formas legales o retóricas. La Argentina se encuentra consigo misma a través del principio de autoridad. El gobierno y el poder se reconcilian, y la Nación recobra su destino."

De esta forma el Dr. Grondona realizaba la apología al golpe de estado, considerando la Constitución Nacional como "formas legales o retóricas".

Pero si hay algo en que no se equivocaba era cuando planteaba que el "gobierno y el poder se reconcilian", ya que durante el gobierno del Dr. Illía las FFAA no estuvieron sometidas al poder político, ni el presidente cumplió la función que le tiene destinada la Constitución como Comandante de las FFAA.

Es decir que el real poder seguía residiendo desde 1955 en las FFAA, que actuaban como brazo armado de la oligarquía y del imperialismo yanqui, y que ahora habían decidido dar la cara y manejar el gobierno sin intermediarios.

Los radicales comprobaban aquel dicho popular de que "en el pecado está el castigo", ya que ellos habían colaborado activamente para que este estado de cosas fuese posible en la Argentina. Participaron en el primer golpe militar sangriento producido en el país, al que llamaban alegremente Revolución Libertadora. Muchos de ellos habían integrado los comandos civiles que tomaban a punta de pistola los sindicatos peronistas; constituyeron la variante continuista en las elecciones de 1958 con el peronismo proscrito, y por último, habían participado en las elecciones de 1963 avalando nuevamente la proscripción del peronismo, al no dar cumplimiento al pacto firmado por Ricardo Balbín y Raúl Materna (en representación del radicalismo y el justicialismo respectivamente) en la Asamblea de la Civilidad, según el cual si algún candidato era proscrito, todos los partidos se abstendrían de participar en las elecciones.

Y ahora que eran echados de la Casa Rosada por este mismo poder militar, se encontraban con un pueblo que los observaba con la mayor de las indiferencias, incapaz de mover un dedo en defensa del orden constitucional. Incluso con grandes sectores de ese pueblo esperanzado en el caudillo de cartón que les proponían las FFAA junto al establishment económico, la burocracia sindical y algún partido político.

El ex presidente Frondizi declaraba cuatro días antes del golpe que "en 1966 se hará una gran revolución en la que participarán las FFAA y miembros de todos los sectores del que hacer nacional".

Incluso los radicales intransigentes se llamaban a silencio, e iban a necesitar el transcurso de más de dos años para sacar su primera solicitada pidiendo rectificaciones al gobierno militar.

El hecho de que el gobierno de Illía haya tenido una feroz oposición por parte de los sindicalistas, no quiere decir que como contrapartida haya recibido el apoyo de grupos empresarios de real gravitación económica.

"Los ejecutivos obsesionados por la eficiencia consideraban a esos políticos de comité y su retórica electoralista como algo lamentablemente arcaico. Los empresarios monopolistas, los banqueros e incluso los productores rurales no esperaban nada bueno de esos políticos provinciales que no sentían ninguna simpatía por el gran capital y se dedicaban a la defensa de los

débiles. Además, como lo confirmaron las primeras decisiones del gobierno de Illia, particularmente en materia petrolera, el "dogmatismo ideológico" de esos dirigentes impenitentes detendría el impulso industrialista del país. El gobierno de la UCRP era un grano de arena en el engranaje de penetración de la economía central e industrialización dependiente del país. La "sucursalización" de la Argentina en el marco de la redistribución neocapitalista de las inversiones en las naciones periféricas se enfrentaba con un obstáculo imprevisto. Los inversionistas y los industriales extranjeros añoraban la época frondicista y a los desarrollistas con los que era tan fácil entenderse".

Las leyes sociales fueron consideradas un sabotaje a la economía argentina. A la ley del salario mínimo, vital y móvil se le atribuyó efectos inflacionarios, a la ley de despidos que mejoraba las indemnizaciones se la tachó de corruptora de la moral de los trabajadores (tanta fue la presión que Illia vetó la ley), toda intervención del Estado en la economía del país era acusada por los grandes capitales como inconstitucional y atentatoria contra la iniciativa privada.

Es por esto que a nadie asombró que apenas producido, el golpe militar recibiera total e ilimitado apoyo de la Unión Industrial Argentina, la Confederación General Económica, la Sociedad Rural y de la Asociación para la Defensa de la Libre Empresa (ACEL). Posiblemente, en aquella inernal mañana de junio muy pocos protagonistas o espectadores de estos hechos, hayan podido siquiera imaginar los años de violencia que se iban a suceder de ahí en más en la Argentina.

Ese mismo día se produce una anécdota que se podría calificar de premonitoria. Así la comenta Enrique Vanoli, uno de los hombres de conducción del radicalismo: "Entiendo que el bandidaje y la violencia arrancan con la auto titulada Revolución Argentina." La guerrilla brota el 28 de junio de 1966, cuando es derrocado el Dr. Illia. Los jóvenes consideraron que los militares no tenían cura y se los debía escarmentar con sus propios métodos. Illia fue desalojado por Onganía a las 6 de la madrugada. Esa misma tarde, los diputados radicales cuando verifican que el Congreso está clausurado, se reúnen en la confitería El Molino. Sentado junto a Antonio Tróccoli está un joven que hasta ese momento había sido el secretario de su padre, un diputado nacional. El muchacho al término de la desalentadora reunión, dijo en voz alta, y como hablando para sí mismo, algo que estaba en el ánimo de aquella juventud: "No queda otra alternativa que tomar las armas". Aquel joven era Benito Urteaga, y fue el tercero en importancia dentro de la jefatura del ERP.

Corporativismo de facto

Cuando el 28 de junio de 1966 la Junta de Comandantes asalta el gobierno, da a conocer a la población una serie de disposiciones bajo el nombre de Estatuto de la Revolución Argentina. He aquí algunos de sus puntos:

"1° Construir la Junta Revolucionaria con los Comandantes en Jefe de las tres Fuerzas Armadas de la Nación, la que asume el poder político y militar de la República.

2° Destituir de sus cargos al Presidente y Vice de la República, y a los gobernadores y vices de todas las provincias.

3° Disolver el Congreso Nacional y las Legislaturas provinciales.

4° Separar de sus cargos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y al Procurador General de la Nación.

5° Disolver todos los partidos políticos del país.

10° Hacer prestar juramento en manos de esta Junta Revolucionaria a los miembros de la Corte Suprema de Justicia... en conformidad a lo que prescriben los fines revolucionarios, el Estatuto Revolucionario y la Constitución Nacional.

11° Ofrecer el cargo de presidente de la República al Sr. Tte. Gral. (RE) Juan Carlos Onganía, quien aceptado el mismo, y al tomar posición de su cargo, prestará juramento en manos de esta Junta Revolucionaria, en los siguientes términos: 'Yo juro por Dios nuestro Señor y estos Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación, y observar fielmente los Fines Revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demanden'.

Posiblemente, la causa de gran cantidad de los males que luego asolaron al país tengan que buscarse en estas últimas palabras pronunciadas en el juramento de Onganía. La Nación, a través de sus instituciones, nunca le demandó al general Onganía el haber usufructuado el poder, mancillado la Constitución, reprimido al pueblo y entregado el patrimonio nacional al capital extranjero.

Los políticos liberales aceptaron complacientes que se le diera al Estatuto de la Revolución Argentina prioridad normativa sobre la Constitución Nacional. Se omitió toda referencia de provisionalidad de las nuevas autoridades y se caracterizó como leyes a los decretos que habrían de adoptarse en el futuro, entendiendo que el poder legislativo radicaba en la Junta de Comandantes en Jefe.

"El mando presidencial dependía del poder militar, la base social del mando era en primer lugar el "partido militar", y el arraigo en la sociedad era expresado por la "alianza corporativa" entre el poder militar, el poder sindical, y sectores importantes del poder económico. La Argentina proyectaba una suerte de "corporativismo de facto" que habíamos observado años antes como fenómeno en ebullición ahora traducido en una forma política", sostiene Carlos Floria.

Desde 1957 la Universidad venía funcionando en forma autónoma. El rector era nombrado por la Asamblea Universitaria compuesta por profesores y alumnos, sin depender de ningún sector del aparato estatal. De esta forma la Universidad de Buenos Aires (UBA) era ejemplo en Latinoamérica por su nivel científico, de docencia e investigación.

Un mes llegó a convivir Onganía con esta Universidad, considerada por él como "reducto comunista", al que habría que someter a un proceso de depuración. La intervención se realizó a través del Ministerio del Interior, que disolvió el Consejo Superior y propuso a los rectores de las Universidades que permanecieran provisoriamente como interventores. La gran mayoría desechó el ofrecimiento, y alguna facultad, como la de Ciencias Exactas, trató de resistir el atropello; entonces Onganía aplicó la fórmula de la depuración.

La noche del 29 de julio de 1966 pasó a la historia como "la noche de los bastones largos". Uno de los testigos y víctimas de esa jornada vergonzosa fue el profesor norteamericano Warren Ambrose, una de las eminencias internacionales con que contaba la UBA. En una carta enviada al editor de The New York Times relata lo sucedido:

"La policía llegó y sin ninguna formalidad exigió la evacuación total del edificio anunciando que entrarían por la fuerza al cabo de 20 minutos. Luego llegaron los soldados que nos ordenaron, a gritos, pasar a una de las aulas grandes, donde se nos hizo permanecer de pie, con los brazos en alto contra una pared.

"Los golpes se distribuían al azar y yo vi golpear intencionalmente a una mujer, todo esto sin ninguna provocación (...) Luego, a los alaridos, nos agarraron a uno por uno y nos empujaron hacia la salida del edificio. Pero nos hicieron pasar entre una doble fila de soldados, colocados a una distancia de diez pies entre sí, que nos pegaban con palos, o culatas de rifles, y que nos pateaban duramente en cualquier parte del cuerpo que pudieran alcanzar. Nos mantuvieron incluso a suficiente distancia uno del otro de modo que cada soldado pudiera golpear a cada uno de nosotros.

"Esta conducta del gobierno, a mi juicio, va a retrasar seriamente el desarrollo del país, por muchas razones, entre las que se cuenta el hecho de que muchos de los mejores profesores se van a ir del país."

Sin duda, el análisis premonitorio de este catedrático yanqui se hizo realidad, y todos los profesores y hombres de ciencias que se tuvieron que ir—debido a que eran perseguidos por bolches o comunistas—fueron recibidos con los brazos abiertos por las mejores universidades de EEUU y Europa.

La resistencia estudiantil continuó y en una manifestación realizada en Córdoba el 7 de septiembre fue asesinado por la policía el estudiante Santiago Pampillón.

El primer gabinete de Onganía estaba integrado por Enrique Martínez Paz (Interior), Nicanor Costa Méndez (Relaciones Exteriores) y Jorge Néstor Salimei (Economía).

La nueva estructura ministerial preveía cinco ministerios, pero solo se cubren inicialmente los tres mencionados, quedando vacantes en una primera etapa Defensa y Bienestar Social. Jorge Salimei, uno de los fundadores del poderoso grupo Sastru, era un representante del gran capital nacional. No compartía la supresión abrupta del control de cambios, era gradualista en materia de inflación, y consideraba necesario cierto intervencionismo estatal. Esta política se impuso en la primera etapa, con respecto a la otra tendencia económica que habitaba en el seno del gobierno: el liberalismo económico clásico. Ahora se presentaba como economía social de mercado de la mano de su creador, el ingeniero-capitán Alvaro Alsogaray, que el 18 de agosto es designado embajador en EEUU.

Seis meses duró la gestión del Ministro de Economía, que transcurrió en un estado de indefinición e inmovilismo total.

Una de las medidas adoptadas fue la intervención de una decena de ingenios azucareros en la provincia de Tucumán. El motivo fue la superproducción de azúcar, que determinaba la baja

del precio final del producto. La excusa, la improductividad de los ingenios, la carencia de eficiencia y la necesidad de racionalización.

Esto significó cerrar importantes fuentes de trabajo y lanzar a la miseria y a la desesperación a miles de familias tucumanas, que debieron organizarse para resistir el atropello, formar ollas populares para poder subsistir, movilizarse, e iniciar una lucha que duró años.

Otra de las medidas que trajo aparejada una gran conmoción social fue la adoptada en el puerto de Buenos Aires, con el supuesto objetivo de conseguir mayor eficiencia y reducir los costos operativos. Se impuso un reglamento policial, medidas de control y discriminación de viejas conquistas laborales que significaron una intensificación de la producción, un aumento del ritmo de carga y descarga, y una disminución de operarios por cuadrilla. Los obreros portuarios hicieron lo único que podían hacer: fueron a la huelga. Pero era una lucha desigual que estaba destinada a fracasar. Se ocupó militarmente el puerto, haciéndolo funcionar con carneros y rompehuelgas, se encarceló a numerosos activistas y se intervino el sindicato. El secretario general de los portuarios, Eustaquio Tolosa, logró en Londres la solidaridad de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, que declaró el boicot a los buques argentinos. Por este hecho el dirigente fue procesado y encarcelado.

Antes de fin de año el movimiento de resistencia estaba quebrado y los portuarios derrotados; tuvieron que retornar a las tareas aceptando las condiciones de trabajo impuestas por la dictadura.

El resto de la dirigencia sindical tenía otro tipo de expectativas como para dar su solidaridad a los portuarios. Vandor, secretario general de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), concurre a la Casa Rosada para la firma del convenio de su gremio.

El 2 de octubre se realiza el Congreso de la CGT a los efectos de normalizar la vida de la central obrera, que estaba acéfala desde la destitución en febrero de José Alonso. Se nombra una nueva comisión directiva encabezada por el que hasta ese momento lo hacía en forma interina, Francisco Prado de Luz y Fuerza, que responde a la corriente vandorista. El 28 de septiembre un grupo de 18 jóvenes nacionalistas y peronistas, entre ellos Dardo Cabo, Andrés Castillo y Mana Cristina Verrier, fuerzan el aterrizaje en las islas Malvinas de un Douglas DC4 de Aerolíneas Argentinas, en lo que denominan Operativo Cóndor. Este consistía en plantar una bandera argentina en el suelo patrio usurpado por los ingleses. Fueron apresados y permanecieron en las cárceles argentinas por largo tiempo. Años más tarde varios de estos jóvenes serían activos dirigentes del grupo Montoneros.

En el mes de diciembre se producen una serie de cambios que marcan en forma definitiva el rumbo que tomaría, de ahí en más, el gobierno de Onganía.

En el Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) es designado el general Osiris Villegas. Como comandante en Jefe del Ejército es nombrado el general Julio R. Alsogaray (hermano de Alvaro). Y en los Ministerios del Interior y Economía son designados Guillermo Borda y Adalbert Krieger Vasena, respectivamente.

"Si Salimei representaba al capitalismo nacional, Krieger Vasena fue elegido por sus relaciones con los centros financieros internacionales. Este ex ministro de Hacienda de Arambaru man-

tenía excelentes relaciones con los consorcios bancarios y las empresas multinacionales agrupados en ADELA (Atlantic Community Group for the Development of Latin America). Cuando se alejó del ministerio, se convirtió en administrador del consorcio internacional Deltec cuya sede central se encuentra en las Bahamas".

Sindicatos: entre el repliegue y la participación

El gobierno seguía adelante con su objetivo de racionalización administrativa.

A principios de diciembre de 1966 fuma varios decretos de reorganización ferroviaria. Como había sucedido en el puerto, las medidas de racionalización recaerían sobre las espaldas de los obreros. Se plantea el cierre de talleres ferroviarios—que eran fuente de trabajo de miles de operarios—, y la eliminación de viejas conquistas laborales que eran consideradas como privilegios injustificados. Los dos gremios del riel—la Unión Ferroviaria y La Fraternidad—se movilizan, y a principios de 1967 van a la huelga, presionando sobre la conducción de la CGT para la realización de un plan de lucha.

Esto coincide con conflictos en otros sectores obreros: una manifestación de trabajadores de Luz y Fuerza es violentamente reprimida por la policía porteña. Un grupo de estibadores ocupa la sede de la CGT, exigiendo medidas concretas en apoyo de su conflicto. Obreros del ingenio Bella Vista en Tucumán son violentamente reprimidos, asesinando a Hilda Natalia Guerrero de Molina, madre de cuatro hijos y cocinera de la olla popular, quedando a su vez dos trabajadores gravemente heridos. La Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA) declara una huelga de 24 horas. En Córdoba son cesanteados 950 obreros de IKA y a fines de enero se inician paros en toda la industria automotriz.

El 4 de enero de 1967 presta juramento el Ministro de Economía. A los pocos días da a conocer el presupuesto y el adelanto de algunas pautas de su programa de acción para el primer año de su gestión, basado en la exigencia de nuevos sacrificios para la población. Con esta situación se arriba a la reunión del Comité Central Confederal (CCC) de la CGT que se realiza el 4 de febrero. Aquí se debaten fundamentalmente dos posiciones: una, sustentada por el sector vandorista, que impulsa la votación de un plan de lucha, y otra que se auto caracteriza como más realista, que se opone a todo tipo de medidas de fuerza. Vandor, que lideraba y hegemonizaba la CGT, estaba en la cúspide de su carrera política y sindical en el momento de producirse el golpe militar, y había jugado todo su prestigio personal y poder político, por primera vez, en la suerte de un gobernante. Transcurridos siete meses, percibe la inexorable caída de la máscara nacionalista de Onganía, el aumento de las tensiones sociales, y la no retribución por los servicios prestados. Vandor sabe también que en 1967 tendrá que revalidar sus títulos en el sindicato metalúrgico, y que si bien para eso cuenta con un aparato muy bien montado, una estrecha vinculación de su figura con la de Onganía constituye un indudable elemento de desprestigio. Tienen en claro, asimismo, que el hecho de perder fuerza ante sus bases lo debilita como interlocutor válido ante Onganía.

Se impone entonces dar un paso al costado, e implementar la táctica que tan buenos resultados le ha dado siempre: presionar para luego negociar. Y en esto se diferencian básicamente los vandoristas de la otra línea que ya se perfilaba en el Congreso de la CGT, y que luego sería conocida como participacionista o colaboracionista. Estos convivían y colaboraban abierta-

mente con el gobierno, y su participación consistía en frenar toda lucha obrera. En cambio, los vanderistas utilizaban toda movilización o huelga como factor de presión, tanto frente a la patronal como ante el gobierno, para luego negociar. En lo que coincidían con el otro sector era en que esta negociación inexorablemente conducía a la traición de la lucha emprendida.

Según Guillermo O'Donnell: "La meta era fortalecer sus propias organizaciones y penetrar el aparato estatal para influir sobre las posiciones más determinantes de la política económica y social, basado en una pragmática estrategia de alianzas con otras fuerzas sociales—sin excluir a la gran burguesía, en cuyas ramas tendían a estar insertados los sindicatos del vanderismo—. Este sindicalismo estaba habituado a presiones, a veces con violencia, para negociar pragmáticamente, y a producir condenas altisonantes contra políticas económicas, pero rodeándolas con una vaga versión de capitalismo nacionalista en el que se articularían con justicia el capital y el trabajo. Combativo en sus tácticas y tíbilmente reformista en sus metas, arriesgaba encontrarse ante dos alas que reconciliaran más lógicamente medios y metas: una que llegara a cuestionamientos anticapitalistas y otra que buscará una vía de influencia subordinándose a una táctica estrictamente negociadora".

Es así como es aprobado el Plan de Acción que disponía un período de agitación desde el día 8 hasta el 17 de febrero, con paros parciales entre el 20 y el 24 y una huelga de 24 horas el 1° de marzo, y otra de 48 horas el día 21 del mismo mes.

Vander, en un encendido discurso, afirma: "los metalúrgicos estamos dispuestos a tomar las fábricas si fuera necesario; sabemos que la huelga va a ser difícil, pero mejor que decir es hacer y entonces haremos: mi organización compromete su apoyo a las medidas dispuestas". Pero esta vez el avezado burócrata había pecado de ingenuidad al creer que esta amenaza haría retroceder el gobierno.

La reacción gubernamental fue inmediata y la contraofensiva tan violenta como inesperada. El 10 de febrero la policía da a publicidad el descubrimiento de un plan terrorista que debía coincidir con el plan de acción de la CGT. A partir de ahí el gobierno informa que había impuesto interrumpir el diálogo con la central obrera y prohibir toda manifestación callejera. También se dispone la intervención de los sindicatos de la Unión Ferroviaria y la FOTIA, interviniendo sus cuentas bancarias y congelando los fondos de la mismas.

Los dirigentes vacilan y el gobierno arremete. Veinticuatro horas antes del paro amenaza con severas sanciones a los empleados de la administración pública que adhirieran a las medidas dispuestas por la CGT.

Ante la defección de la conducción del paro, el mismo fracasa, y al día siguiente el gobierno suspende la personería gremial de la UOM, FOTIA, FOETRA (telefónicos), textiles y químicos.

El 9 de marzo se reúne la conducción de la CGT y da por terminado el plan de acción. No obstante, la escalada antisindical prosigue aplicando sanciones a los agentes del Estado que se plegaron a la huelga. Se producen cesantías en ENTEL, agua y energía, y Ferrocarriles. Una comisión del Ministerio de Trabajo recomienda la prescindencia de 150.000 empleados en la administración pública. Los metalúrgicos denuncian la suspensión de 800 obreros en la planta de Monte Chingolo IKA.

El gobierno promulga la ley que establece el Servicio Civil de Defensa, por lo que se posibilita la movilización y sometimiento del fuero militar de todos los habitantes mayores de 14 años sin distinción de sexo, edad o nacionalidad. Se decreta el congelamiento de salarios, se intervienen la Caja de Jubilaciones y el Consejo Nacional de Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Los sindicalistas están desconcertados. Han sufrido un duro revés político. Habiendo sido derrotado el esquema básico vandorista presionar para negociar, los participacionistas avanzan en su posición de negociar de cualquier manera. Renuncia la Comisión Directiva y queda acéfala la CGT. Se reúne nuevamente el CCC el 24 de marzo, y designa, a propuesta de Vandor, una comisión de 20 miembros en los que se delega la autoridad del organismo conductor de la CGT. Esta comisión, llamada de los 20, tiene como misión administrar y dirigir la central obrera hasta su normalización.

A partir de la derrota del Plan de Acción, se acentúa el proceso de desprestigio de la central sindical ante las bases. Se da a su vez un reagrupamiento de los distintos sectores, y así el espectro de la burocracia sindical adquiere una nueva fisonomía. Las dos alas de las 62 Organizaciones se unifican, siempre bajo el liderazgo del Lobo Vandor. Adquiere mayor importancia el nuevo sector autodenominado Nueva Corriente de Opinión, conocido como participacionismo o colaboracionismo. Este sector plantea firmemente la sumisión al gobierno para conseguir de esta forma algún tipo de prebenda, sin necesidad de enfrentarse con huelgas. Encabeza esta tendencia el ideólogo de la participación, Juan José Taccone, secretario general de la filial Capital de Luz y Fuerza, quien coincide con el gobierno de Onganía "en que el gobierno caldo el 28 de junio de 1966 fue carcomido por la politiquería". Es secundado por los dirigentes José Alonso (vestido) y Rogelio Coria (construcción).

Va surgiendo, asimismo, una nueva tendencia interna en el seno del movimiento obrero, con dirigentes que responden más a sus bases y que se oponen frontalmente a la política del gobierno. Son algunos de estos dirigentes: Amado Olmos (sanidad), Raimundo Ongaro (gráficos), Julio Guillán (telefónicos), Jorge Di Pasquale (farmacia), Ricardo De Luca (navales), Atilio Santillán (FOTIA Tucumán), Agustín Tosco (Luz y Fuerza de Córdoba). Pero los problemas de Vandor no eran únicamente con el gobierno, ni se circunscribían a mantener el delicado equilibrio de fuerzas en el seno de la CGT. También afrontaba dificultades dentro de su gremio.

Después de dirigir durante diez años los destinos del sindicato metalúrgico, se presentan en mayo de 1967, dos listas opositoras a discutirle la conducción. Vandor considera llegado el momento de pasar la factura por los servicios prestados, y así se lo hace saber al gobierno. Su antiguo amigo y actual Secretario de Trabajo, Rubens San Sebastián, ordena la suspensión de las elecciones en la UOM y la prorroga de los mandatos de los dirigentes. Este hecho y su posterior desenlace fue minuciosamente investigado por el periodista y escritor Rodolfo Walsh, y sirve para comprender cuáles son los mecanismos utilizados por algunos dirigentes para perpetuarse en sus sillones. Así se refiere a estos hechos:

"Y se quedó elegido (Vandor) por el Secretario de Trabajo del gobierno elegido por nadie. Ahora había que ajustar la deteriorada maquinaria. Las grandes empresas metalúrgicas despiden uno por uno a los enemigos conocidos de Vandor. La General Electric echa a 5 candidatos de la lista gris, además de 56 obreros de su planta de Santo Domingo y 70 (incluso 12 delegados) de su planta Carlos Berg. La Phillips completa un millar de despidos: no queda ningún

delegado, o que haya sido delegado aún en los tiempos más remotos. Tamet, de la banca Torquinst cesantea a 47 candidatos opositores. Camea, a 150. Despidos masivos de trabajadores antivandoristas sacuden a Ascensores Electra, BTB, Fanal, Saccol, Volcán, Deador, Pedriel, Manuel Royo, Silvania y Zabaza.

"Los grises y los rosados desaparecen del mapa. Advertidos los metalúrgicos esconden el bulto: antivandorismo equivale a perder el trabajo. En marzo de 1968 Vandor ha recuperado su confianza y cree que puede dar elecciones.

"Su proverbial cautela, sin embargo, le hace elegir el momento de la convocatoria: la semana de carnaval, cuando muchos trabajadores están de vacaciones. Como por milagro resurge la oposición, las listas rosa y gris se unifican en la Capital, presentan sus 104 candidatos y las 750 firmas de aval. Vandor acude entonces a una táctica que nadie ha perfeccionado como él: dividir el campo opositor. Compra directamente a 6 candidatos de la lista gris, que se reúnen, "expulsan" a los demás y publican una solicitada bajo el título Procedemos así porque no somos comunistas. Pero esta vez la maniobra fracasa.

"Capital, con 60.000 afiliados, era la seccional más importante. Setenta y dos horas antes de los comicios era evidente que la gris arrasaba. "Ganábamos por muerte y desolación", dice un dirigente. El vandorismo emplea un último recurso: hace impugnar la lista por la junta electoral. La protesta opositora se derivó al Secretario San Sebastián, que todavía lo está pensando.

"La lista gris ordenó entonces no votar. En la Capital, 57.500 trabajadores sobre 60.000 cumplieron la orden. El vandorismo obtuvo apenas 2.500 votos, el cuatro por ciento del gremio...

"Falta aún elegir los cuerpos de delegados. Se hacen algunas elecciones maravillosas, con sobres abiertos que entran de a 3 en las urnas, carnets falsos, voto cantado, urnas cambiadas. En la fábrica de envases Centenera, Bunge y Born facilita el triunfo de sus amigos despidiendo a 40 activistas opositores. (...) Igual que en 1955 el gremio está intervenido. Sólo que el interventor es ahora el secretario general de la UOM" .

Autoritarismo político y liberalismo económico

E1 13 de marzo de 1967 el Ministro de Economía, Adalbert Krieger Vasena, hace público su Plan de Estabilización y Desarrollo. También anuncia una devaluación del 40% de la moneda argentina, que la coloca por debajo de su paridad real con el dolar.

Todo esto surge como natural corolario de las tratativas mantenidas por el Ministro con el FMI (Fondo Monetario Internacional). Una semana después de la devaluación se informa con satisfacción que la Argentina ha conseguido un crédito stand by de 125 millones de dólares concedido por dicha institución que, junto a los préstamos otorgados por otras fuentes, totalizaban 400 millones de dólares.

"Con Krieger Vasena y sus colaboradores, las fracciones más dinámicas y transnacionalizadas de las clases dominantes ocupaban buena parte del aparato civil del Estado. Este imperio se extendía hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo titular, Nicanor Costa Méndez, a pesar de su pasado nacionalista, era parte—por ideología, por contactos personales, y por las empresas a las que estaba vinculado—del mismo grupo" .

Junto a la fuerte devaluación se implementó la liberación total del mercado cambiario, la fijación de derechos del 25% sobre las exportaciones no industriales y una importante rebaja (50%) de las barreras aduaneras. En este paraíso de libertad económica, donde los pequeños industriales iban a poder competir libremente con los grandes monopolios internacionales, había algo que no iba a ser tan libre: el aumento de salarios.

Se prohibió la libre discusión de los Convenios Colectivos de trabajo y se decretó el congelamiento de los salarios por veinte meses. Empezaba a quedar en claro quiénes pagarían la factura de la estabilización, ya que esto, además de afectar directamente a los trabajadores y a todos los asalariados en general, producía una recesión selectiva. Es decir, perjudicaba a un sector (trabajadores y pequeña y mediana industria) para permitir la expansión de otro (grandes empresas y multinacionales). Así se entiende cómo mientras el PBI (Producto Bruto Interno) crecía, miles de empresas iban a la quiebra.

"Obviamente, la congelación de salarios benefició con mayor intensidad a aquellos sectores empresarios cuya demanda no era una función directa del ingreso disponible de la población asalariada. Por el contrario, aquellas firmas que dependían directamente de dicha demanda resultaron fuertemente afectadas por la contracción del mercado, provocándose numerosas quiebras. Según cifras del periódico El Economista entre 1965 y 1973, 11.600 empresas se declararon en quiebra".

Los supuestos objetivos perseguidos con la implementación de este plan económico, eran muy ambiciosos. Se aseguraba que se iba a controlar la inflación, rebajar los costos industriales, aumentar la eficiencia en la producción y atraer capitales extranjeros para reactivar y expandir la economía. También se conseguiría la estabilidad monetaria y la nivelación presupuestaria.

El gobierno contaba para desarrollar su plan de ortodoxo liberalismo económico con inmejorables condiciones: una dirigencia sindical derrotada, un entusiasta apoyo de los sectores agropecuarios e industriales y un pueblo decepcionado de su dirigencia sindical y política. Pero fundamentalmente, contaba con la inexistencia de toda oposición política. El régimen autoritario era el complemento indispensable para el plan económico. Autoritarismo político y liberalismo económico actuaban, reincidentemente, en forma complementaria e interdependiente. Esta y otras experiencias así lo confirman.

Los liberales dejaban que Onganía hiciera gala de su pseudo nacionalismo y neocorporativismo, utilizando su autoritarismo y su mano dura para imponer un plan económico liberal en la Argentina. "Parece quedar claro que este tipo de políticas necesitan un alto grado de coerción para poder aplicarse. Esta violencia puede aplicarse en forma paralela al programa económico; puede implementarse después del mismo, al verse sus resultados, o inclusive aplicarse en forma preventiva, antes que las medidas económicas. En cualquiera de estos casos necesitan de la violencia ya que no pueden aspirar al consenso", asegura Antonio Brailovski.

Para el logro de las metas propuestas, a juicio del gobierno, se iba a necesitar como mínimo una década, dividida en tres etapas estancas, imprecisas en su duración, y denominadas como tiempo económico, tiempo social y tiempo político.

Uno de los más promocionados logros del Ministerio de Economía fue la reducción de la tasa de inflación que pasó del 31,9 en 1966 al 7,6 en 1969. También se registró un crecimiento en el PBI que fue del 2% en 1967 al 6,8% en 1969.

Lo que cabría preguntarse es a qué sector se estaba beneficiando ya que la participación de los asalariados en el Producto Bruto Nacional había descendido del 42% en 1967 al 39% en 1969. La baja del salario real era evidente. Tomando como base 1960 = 100, había sido del 132 en 1966 llegando al 123 en 1968.

Así se realizaba la anunciada baja de los costos. La regresiva redistribución del ingreso nacional estaba dirigida a la concentración de la riqueza. La rectificación de los desajustes del presupuesto nacional se realizó a través de una fuerte presión impositiva -perjudicando fundamentalmente a los pequeños industriales y productores rurales- que sufrió un aumento del 65% en el bienio 66-67.

Según el historiador Félix Luna, "El incremento de las reservas de divisas también presentaba una cara muy distinta a la que se exaltaba: se trataba de préstamos, no de inversiones en sectores básicos, y las remesas al exterior por beneficios e intereses de este capital estéril, dedicado solamente a mantener el prestigio exterior del peso argentino, era en 1969 igual a todo lo remesado por igual concepto entre 1950 y 1959. De una balanza de pagos favorable en más de 800 millones de dólares en 1967 había pasado a una desfavorable en más de 200 millones de igual moneda en 1969. Y el ingreso de capitales de inversión se había reducido en 1969 en más de 120% respecto de dos años atrás. Por otra parte, las importaciones aumentaron en 1969 más de un 50% respecto de 1967, con el agravante de que se trataba, en medida sustancial, de importaciones de artículos santuarios o alimenticios".

El ingreso irrestricto de productos de importación, sumado a la recesión ocasionada por el menor poder adquisitivo de la población y a la competencia con grandes empresas monopolísticas, llevó a la quiebra a un sector importante del empresariado nacional.

Esto fue aprovechado por estas mismas sociedades multinacionales, que con un dólar sobrevaluado, compraron por monedas empresas nacionales del rubro del tabaco, metalurgia, especialidades medicinales y sectores de la banca. De esta manera se desargentinizaba la industria nacional que pasaba a funcionar como sucursal de complejos multinacionales. "Las condiciones de descapitalización y falta de estímulo creadas por la estructura económica existente en el país, han generado un ambiente propicio para que el proceso de desnacionalización de empresas adquiriera gran relieve. Esas condiciones, por cierto, se han visto agravadas como consecuencia de medidas coyunturales, que adaptadas para combatir la inflación, repercutieron seriamente sobre las economías empresarias colocándolas en una dura disyuntiva. (...) una importante cantidad de empresarios argentinos han tenido que optar por enviar sus empresas a la quiebra o enajenar a un grupo internacional el paquete accionario de la sociedad", opinaba en ese momento Héctor Sauret.

Otro mecanismo utilizado para reforzar esta política de aniquilamiento del empresariado nacional y traspaso a las multinacionales, fue la restricción del crédito.

"Este proceso de desnacionalización fue reforzado por la ausencia de apoyo por parte del sistema financiero. Por ejemplo, en 1956, los saldos de préstamos bancarios a la industria eran de un monto equivalente al 25% del producto manufacturero de ese año. En 1969 equivalían al 15% de dicho producto. De este modo, las empresas que dependían de la financiación bancaria quedaban en inferioridad con respecto de aquéllas que poseían redes financieras propias o que recibían créditos de sus casas matrices del exterior. Para el año 1969, José Ber Gelbard señalaba que, de las 100 mayores empresas del país, 83 eran extranjeras o tenían participación de capitales del exterior".

Esta fue la tarea realizada por Onganía y sus ministro de Lujo, quien fue premiado en octubre de 1968 por el FMI con la designación de presidente del Congreso anual.